

PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y (NUEVA) POBREZA EN EL MEDIO RURAL Y ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA EN LA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL (ALBACETE).¹

PROCESSES OF SOCIAL EXCLUSION AND (NEW) POVERTY IN RURAL AREAS AND RESILIENCE STRATEGIES IN THE SIERRA DE ALCARAZ AND CAMPO DE MONTIEL (ALBACETE).

JAIME ESCRIBANO PIZARRO²
Universidad de Valencia (España)
Jaime.Escribano@uv.es

DIANA E. VALERO LÓPEZ³
University of the Highlands and Islands.
Diana.Valero.Perth@uhi.ac.uk

ELISEO MARTÍNEZ MUÑOZ⁴
Universidad de Valencia (España)
Eliseo.Martinez@uv.es

Recibido/Received: 07-08-2018
Aceptado/Accepted: 05-11-2018

RESUMEN: La crisis de 2008 no solo afecta a las ciudades, también es un fenómeno presente en los espacios rurales. Este y las diversas soluciones adoptadas por las admi-

ABSTRACT: The 2008 crisis does not only affect cities, it is also a phenomenon present in rural areas. This and the various solutions adopted by public administrations to rever-

¹ Este trabajo recoge el conjunto de resultados obtenidos gracias al proyecto "El impacto de la crisis en las nuevas formas de exclusión social en el medio rural albaceteño: un caso de estudio a partir de la realidad territorial de la comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel", financiado por el Instituto de Estudios Albacencenses "Don Juan Manuel", en su convocatoria de Ayudas a la Investigación 2013.

² Grupo de Investigación de Desarrollo Rural - Unidad de Desarrollo Rural y Evaluación de Políticas Públicas - UDERVAL (Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local). Dpto. de Geografía, Universidad de Valencia.

³ Centre for Mountain Studies, Perth College. University of the Highlands and Islands (Escocia, Reino Unido).

⁴ Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad de Valencia.

nistraciones públicas para revertirla han incrementado y diversificado la población excluida. El presente trabajo identifica y caracteriza a los principales (y nuevos) grupos de población vulnerable existentes en medio rural, y examina qué acciones desarrolla ésta para enfrentarse a los procesos de exclusión. A partir del estudio de la comarca rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Albacete, España) y la realización de veintidós entrevistas semiestructuradas a diversos actores clave, podemos adelantar que las estrategias de resiliencia continúan pivotando alrededor de las opciones tradicionales (organizaciones comunitarias, redes sociofamiliares o, en el peor de los casos, la emigración), debido a que cualquier progreso en dicha línea se ha visto interrumpido ante el desmantelamiento continuado del Estado de Bienestar. En consecuencia, por un lado, el medio rural analizado cuenta con un nuevo colectivo vulnerable (las familias "normalizadas") con ciertos rasgos específicos frente a los tradicionales colectivos en situación de exclusión social. Pero, además, por otro lado, aumentan y se diversifican los motivos por los que la población excluida, en general, ve incrementada su vulnerabilidad.

PALABRAS CLAVE: espacios rurales, pobreza y exclusión social, servicios a la población, familias normalizadas, resiliencia, Castilla-La Mancha (España).

se it have increased and diversified the excluded population. This paper identifies and characterizes the main (and new) vulnerable population groups existing in rural areas, and examines their actions to address exclusion processes. From the study of the rural region of the Sierra de Alcaraz and Campo de Montiel (Albacete, Spain) and the conduct of twenty-two semi-structured interviews with various key actors, we can say that resilience strategies continue to revolve around traditional options (community organizations, social-family networks or, in the worst case, emigration), because any progress on this line has been interrupted by the continued dismantling of the Welfare State. Consequently, on the one hand, the rural milieu analysed has a new vulnerable group ("normalised" families) with certain specific features compared to the traditional groups in a situation of social exclusion. On the other hand, however, the reasons why the excluded population, in general, are more vulnerable are increasing and diversifying.

KEY WORDS: rural areas, poverty and social exclusion, population services, normalised families, resilience, Castilla-La Mancha (Spain).

1. PLANTEAMIENTO Y OBJETO DE ESTUDIO

En la actualidad, nadie puede negar que la crisis iniciada en 2008 por cuestiones financieras tuvo unos impactos más allá del ámbito económico, que retroalimentaron el propio fenómeno, el cual a su vez también fue alentado por algunas de las medidas adoptadas por las administraciones públicas para intentar resolver esta (flexibilización del mercado laboral, reducción de la oferta de servicios elementales, etc.). Como resultado de esta combinación de procesos, el número de personas en riesgo y situación de exclusión social aumentó considerablemente (Marcuello, 2010). En un principio, este aumento se plasmó, y se continúa plasmando, con facilidad en las ciudades, donde desde 2008 se ha experimentado un significativo crecimiento de demandas de apoyo por parte de asociaciones y colectivos de asistencia social, que buscan incrementar los recursos de todo tipo con los que resolver las, todavía, numerosas situaciones de desahucios, despidos, etc.

Sin embargo, los problemas derivados de la exclusión social no han sido, ni son una cuestión urbana, por mucho que sea en estos territorios donde más claramente puedan apreciarse (Cabero et al., 2010). De hecho, los fenómenos de pobreza y exclusión social, sus causas y consecuencias, son objeto de análisis por parte de numerosas investigaciones, especialmente desde la sociología. Pero raramente en su examen se aborda una dimensión territorial que incida con claridad en las diferencias que incluye el propio espacio, en tanto en cuanto no son iguales los problemas ni los recursos que, en este tema, caracterizan a los espacios urbanos y a los rurales (Mathieu, 1997). Es más, cuando esto ocurre y el análisis se centra en el ámbito rural, existe aún cierta tendencia a idealizar la vida rural en contacto con la naturaleza y, aunque cada vez son más evidentes los efectos de la crisis y de la desestructuración agraria sobre las economías locales y, por tanto, todo tipo de colectivos sociales, todavía se anteponen las ideas de que, por un lado, la existencia de fuertes redes sociofamiliares ayuda a resolver cualquier tipo de dificultad y, por otro, los problemas solo afectan a los agricultores e inmigrantes extranjeros (Izcara, 2002).

No obstante, las situaciones de exclusión social, así como el riesgo de caer en estas, no se caracterizan solo a los trabajadores del sector primario o las personas dependientes que viven en el medio rural. Se trata de un fenómeno que afecta igualmente a obreros de la construcción, individuos urbanos cuyos ideales de vida les han dirigido hacia estos espacios, e incluso a jóvenes que todavía no han conseguido consolidarse profesionalmente, entre otros. Es decir, el medio rural hace tiempo que dejó

de ser únicamente el espacio del agricultor, por lo que cualquier estudio sobre la realidad social actual de este espacio, enfocado además desde la perspectiva de los procesos de pobreza y exclusión social, debe no solo contemplar a estos "nuevos" habitantes, sino también el conjunto (y tipo) de estrategias desarrolladas por los mismos para soportar y superar tales procesos.

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo es doble: por un lado, demostrar que la crisis financiera iniciada en 2008 (y muchas de las respuestas públicas asociadas a la misma) afecta no solo a un conjunto de población rural más diverso (en cuanto a perfiles sociales, formación y ciclos de vida), sino que además se han diversificado los motivos por los que las situaciones de exclusión social afectan a los colectivos rurales tradicionalmente vulnerables (mujeres, personas mayores, inmigrantes, entre otros). Y, por otro, explorar las estrategias de resolución y lucha más habituales empleadas por el conjunto de población en situación de pobreza y/o exclusión social, organizándolas según su dimensión pública, privada, comunitaria y sociofamiliar, e incorporando el papel que la política de desarrollo rural (a través de LEADER) ha desempeñado en ellas.

2. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Nuestra investigación toma como marco de referencia general la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una de las autonomías del Estado español con mayor grado de ruralidad⁵, y en la que los recortes en prestaciones públicas se han materializado en más de una ocasión. Por ejemplo, mediante la supresión de servicios elementales para el conjunto de la población rural, como es el caso de las urgencias rurales, o con el cierre de equipamientos específicos relacionados con temas de igualdad de género, es decir, los Centros de la Mujer. Es cierto que en ambos casos la administración regional rectificó con rapidez, en parte por la presión social, y en la actualidad estos dos servicios vuelven a funcionar. Sin embargo, nadie puede dudar de que la interrupción de estos servicios, así como otros, supuso un incremento de la vulnerabilidad de los colectivos relacionados con los mismos.

⁵ Para comprobar el mismo, puede revisarse el trabajo realizado por Goerlich et al. (2016) sobre la tipología urbano-rural de los municipios españoles. Una visión interactiva de los resultados se encuentra disponible en la web: https://goerlich.carto.com/viz/aa0da7fc-c9d9-11e5-bc65-0e31c9be1b51/public_map (última consulta realizada el 15 de noviembre de 2018).

A partir de aquí, hemos centrado nuestro trabajo en un caso de estudio concreto, al entender que de este modo podemos comprender con relativa sencillez a partir de un trabajo cualitativo de entrevistas con los actores más relevantes del área seleccionada (Bonache, 1999), la naturaleza de los fenómenos de pobreza y exclusión social presentes en el medio rural manchego. Este, al igual que el espacio rural español, se caracteriza por su diversidad de situaciones socioeconómicas. Por ello, hemos seleccionado como área de estudio la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM), en Albacete, por la variedad de espacios rurales que alberga la misma.

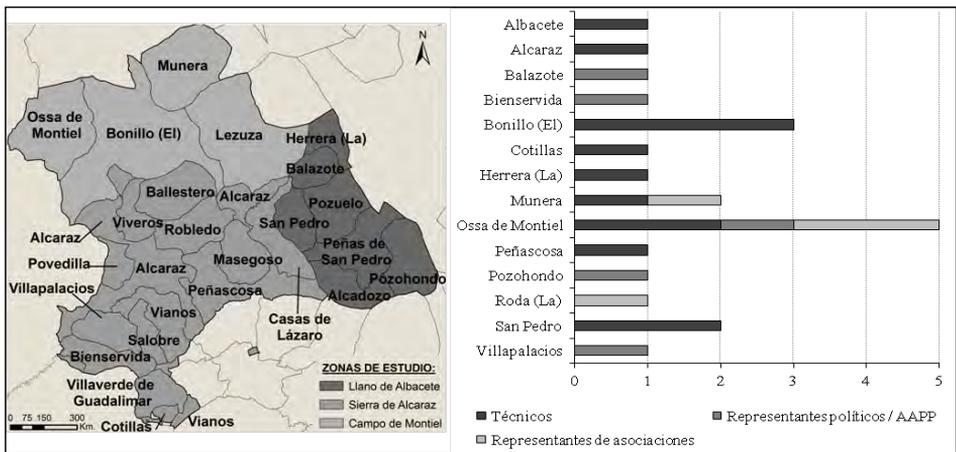


Figura 1. Localización y distribución de las entrevistas por municipios y actores
 Fuente: elaboración propia.

De este modo, gracias a la multitud de realidades rurales presentes en esta comarca (espacios densamente poblados, otros con rasgos de cabeceras de servicios, otros con problemas de despoblación y/o abandono de actividades, etc.), podemos diferenciar el impacto que ha tenido la reorganización de los servicios públicos sobre el medio rural desde distintos puntos de vista, ya que no todos los municipios cuentan con idéntica dotación y cobertura de servicios básicos. Además, esta comarca resulta un interesante marco de análisis por la diversidad de contextos socio-familiares y económico-laborales que caracteriza a su población. Así, no es igual la experiencia de los residentes en municipios cercanos a ámbitos urbanos o con una entidad y capacidad de organización territorial importante (Alcaraz), que la de los habitantes que viven en núcleos de población diseminados (La Herrería, pedanía de Alcaozo), o en zonas de difícil acceso (Cotillas) (Figura 1).

Por su parte, la información primaria ha derivado de la realización de entrevistas personales y semiestructuradas con informantes clave. Esta tipología de entrevista se presenta como uno de los instrumentos cualitativos más adecuados para conocer los recursos y actitudes con los que la población rural pone en marcha sus estrategias de resiliencia, al ofrecer la flexibilidad necesaria para plantear los temas clave perseguidos según las características de los entrevistados (Valles, 2002).

Técnicos Servicios de la Adm. Pública		Representantes Políticos	Colectivos de Acción Social
Servicios Sociales Generales	Específicos		
Trabajadores Sociales Generales (o de base)	Profesionales que trabajan en servicios y/o programas dirigidos a colectivos específicos: mujer, infancia, desempleados, etc.	Alcaldes/as de la zona, algunos con perspectiva de análisis supramunicipal (al ejercer responsabilidades en la mancomunidad, la diputación, etc.)	Trabajadores sociales y voluntarios de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, y fin social
Entrevistas A.1 – A.7	Entrevistas A.8 – A.13	Entrevistas B.1 – B.5	Entrevistas C.1 – C.4

Tabla 1. Clasificación de las entrevistas según perfil de los informantes
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas (abril de 2014).

Para la obtención de datos válidos y pertinentes no solo ha importado su número (cuyo límite quedó establecido por la “saturación de información”), sino también que estas fueran suficiente representativas de la diversidad de situaciones territoriales definidas previamente. Por ello, los actores elegidos han sido aquellos con mayor capacidad para facilitarnos no solo información detallada sobre las situaciones de exclusión social presentes en el área de estudio, su evolución reciente, causas de las mismas y recursos existentes para hacerlas frente, sino también por ser capaces de presentar un conocimiento global e integrador del conjunto de dinámicas vinculadas a estos territorios gracias a su experiencia personal y/o profesional en estas zonas.

De este modo, durante el mes de abril de 2014 se realizaron (y registraron en audio) un total de 22 entrevistas, con una duración media entre 40 y 60 minutos. Estas recogieron las respuestas de 13 técnicos (entre técnicos de Servicios Sociales, profesionales del sector educativo, y agentes de empleo y desarrollo local); cinco actores políticos (algunos con competencias tanto en el ámbito local, como comarcal e incluso provincial) y, finalmente, cuatro representantes de diversos colectivos de ac-

ción social (Cáritas, Cruz Roja, asociaciones de discapacitados psíquicos, de alcohólicos anónimos, etc.) (Tabla 1).

A partir de aquí, toda la información primaria obtenida se analizó, por un lado, a través de técnicas de interpretación y comparación de los discursos y, por otro, en relación con toda una serie de conceptos y enunciados clave previamente trabajados a partir de la bibliografía existente sobre el objeto de estudio, y de la normativa específica vinculada con el área de trabajo seleccionada.

Para ello, se estructuró el conjunto de la investigación en una serie de temas centrados en los aspectos básicos necesarios para dar respuesta a nuestros dos objetivos de investigación. Por un lado, para comprobar el aumento de la tipología de colectivos presente en medio rural en situación y riesgo de exclusión social, se abordaron aspectos relacionados con las tendencias sociales derivadas de la evolución reciente de los marcos normativos y reguladores, los tipos de programas de atención social existentes, así como las prestaciones a ellos vinculados, los tipos de usuarios de los servicios sociales existentes en los espacios rurales analizados (sus rasgos y sus demandas), y la evolución de los mismos (así como los motivos de esta). Por otro lado, para detectar las formas y medios de resolución y lucha de la población excluida, se trabajaron aspectos en torno a los recursos y/o activos disponibles por parte de la población vulnerable en general, y excluida en particular, para hacer frente a su situación, frecuencia de acceso a los mismos, dificultades para su disfrute, cambios experimentados en su disponibilidad, etc.

A continuación, se establecieron diferentes categorías de estudio para cada una de los aspectos trabajados e identificadas en el párrafo previo, buscando así señalar los aspectos clave que influyen en ellas: organización y funcionamiento de los equipos técnicos; existencia y evolución de nuevos demandantes (por ejemplo, familias normalizadas); situación particular de colectivos tradicionales (mujeres, dependientes, inmigrantes y población gitana); debilidades y fortalezas de la Ayuda de Emergencia, del Ingreso Mínimo de Solidaridad, y de prestaciones similares; aplicación de la Ley de la Dependencia (y ayudas relacionadas como por ejemplo el Servicio de Ayuda a Domicilio); ámbito de actuación de los sistemas de beneficencia y su funcionamiento (a través de los Bancos de Alimentos y/o Roperos.); respuestas oficiales de carácter transversal (iniciativas LEADER, Planes de Empleo y similares.); estrategias de resolución de situaciones de exclusión social a título individual y/o familiar; nuevas amenazas u oportunidades (como por ejemplo, las derivadas de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local); y

consecuencias de los cambios sociales (y por extensión, en la calidad de vida) en los territorios rurales.

Por último, se confeccionaron los discursos resultantes con los que responder al objetivo de la investigación, tras relacionar las respuestas de los entrevistados (reagrupándolas por categorías y temas), con los diferentes procesos territoriales presentes en el área de estudio.

3. APROXIMACIÓN TERRITORIAL A LA COMARCA DE SACAM

La evolución demográfica experimentada por la comarca de SACAM desde la década de los años 60 hasta el año 2013, evidencia que se trata de un espacio caracterizado por un largo y constante proceso de despoblación. De hecho, entre 1960 y 2013 la población se ha visto reducida en casi un 60% (Tabla 2). Las causas son similares a las experimentadas por la provincia de Albacete en su conjunto, resultado del proceso de éxodo rural que afectó al conjunto de España desde mitad del siglo pasado. Al menos hasta 1981, fecha en la que la evolución demográfica del espacio comarcal y provincial diverge; y aunque esta divergencia se mantiene hasta 2013, desde 2008 una y otra muestran una clara alteración en sus ritmos.

	1960	1970	1981	1991	2001	2008	2013	Evol. % 1960-2013
Provincia de Albacete	370.976	335.026	334.468	341.847	367.283	397.493	400.007	7,82%
SACAM	61.435	44.219	34.929	31.147	28.788	27.681	26.292	-57,2%

Tabla 1. Clasificación de las entrevistas según perfil de los informantes

Fuente: Elaboración propia a partir de las Series Historia de Población (INE, 2014) y de los Padrones 2008 y 2013 (IES-JCCM, 2014).

Así, mientras que a partir de 1981 el espacio provincial inicia su recuperación demográfica a un paso cada vez más intenso, la comarca de SACAM mantiene su tendencia a la despoblación, si bien esta reduce su intensidad de forma progresiva hasta 2008. En parte, las lógicas demográficas de ambos espacios están relacionadas, puesto que los resultados positivos provinciales registrados desde 1981 se explican por el proceso de emigraciones internas que se producen desde prácticamente todos los municipios de la provincia hacia la capital de la misma (Sánchez, 2003).

Este proceso se ve reforzado a su vez por el crecimiento natural de los propios emigrados (población joven en edad de reproducción), y a partir de la década del 2000, por la llegada de inmigrantes extranjeros en busca de empleo (García y Casado, 2010).

Por su parte, desde 1981 la comarca de SACAM experimentará con nitidez la doble consecuencia de esta pérdida de población joven, pues junto a la disminución de efectivos que supone su salida, la falta de población capaz de mantener la natalidad contribuirá al envejecimiento de toda la comarca.

A partir de 1991 la comarca de SACAM experimenta, sin embargo, cierta desaceleración en su retroceso demográfico, al menos hasta 2008. Entre los motivos que explican esta ralentización encontramos, por un lado, el agotamiento vital que experimenta el conjunto del área (hasta el punto que cada vez queda menos población capaz de emigrar); por otro, el diseño y ejecución de políticas de desarrollo rural españolas (PROPOM, mediados de los 80) y europeas (LEADER, inicio de los 90), destinadas a la diversificación de actividades y, por tanto, dirigidas a atraer y/o fijar población (Cebrián, 2004); y por último, la presencia progresiva de inmigrantes extranjeros que se dirigen hacia comarcas rurales como la de SACAM ante las ofertas de empleo existentes, vinculadas precisamente a una sociedad local cada vez más envejecida.

Ahora bien, a partir de 2008 todo el panorama demográfico provincial y comarcal descrito experimenta un cambio de ritmo, a consecuencia de la crisis económica. La provincia registra un destacado descenso del crecimiento poblacional, de modo que entre 2008 y 2013 apenas se ganan 2.500 habitantes (Tabla 2). Factores como la salida de población hacia otras regiones más dinámicas (algo evidente entre los inmigrantes) (Godenau y León Santana, 2012), o la reducción de la fecundidad explican esta evolución.

Por su parte, para la comarca de SACAM el comienzo de la crisis rompe la desaceleración que el proceso de despoblación registraba desde 1991. Como resultado, en los cinco años comprendidos entre 2008 y 2013 la comarca retrocede anualmente 278 habitantes, es decir, un ritmo mayor que el experimentado de 1991 a 2008 (17 años), cuando la disminución fue de 204 habitantes de media al año. La explicación de este cambio de ritmo resulta compleja, ya que el número de extranjeros empadronados en la comarca no deja de crecer desde la crisis (Tabla 3). En consecuencia, la pérdida de población que se produce desde 2008 responde sobre todo al descenso de la fecundidad por cuestiones socioeconómicas, en un contexto demográfico ya de por sí poco favorable (recordemos que

la comarca viene de reducir considerablemente el grupo genésico de población en los años anteriores).

	Total Pobl. SACAM (1)	Total Pobl. Ext. Provincial (2)	Total Pobl. Ext. SACAM (3)	% (3) / (2)	% (3) / (1)	Variación % Prov. Pobl. Ext.	Variación % SACAM Pobl. Ext.
2008	27.681	31.128	924	2,97	3,34	-	-
2013	26.292	30.383	1.050	3,46	3,99	-2,39	13,64

Tabla 3. Evolución de los extranjeros en la provincia de Albacete y en el área SACAM (2008-2013)

Elaboración propia a partir los Padrones Municipales de 2008 y de 2013 (IES-JCCM, 2014).

Sin duda, la emigración de la relativamente escasa población femenina todavía en edad de procrear se presenta como el motivo de fondo. Aspectos como la falta de empleo y/o el empeoramiento de las condiciones laborales (re)aparecen en este contexto como los reactivos que disparan la vulnerabilidad de la población femenina, agravada a su vez por la pervivencia de ciertos rasgos culturales (como son las desigualdades de género vinculadas al patriarcado y a la invisibilidad social derivada), y las sucesivas y variadas pérdidas y rupturas sociales resultantes de las “soluciones” planteadas a la crisis por parte de las administraciones públicas (el distanciamiento de los servicios, la ausencia de redes sociales, el coste de los desplazamientos, etc.) (Escribano et al., 2015).

Como resultado el grupo de población mayor mantiene su peso específico en el conjunto comarcal (Tabla 4), siendo junto a las mujeres rurales otro de los colectivos demográficos más vulnerables en estos espacios, debido a las necesidades o demandas que los mayores de 65 años requieren para hacer frente a cuestiones propias y habituales (aislamiento físico y/o relacional, enfermedad, deterioro de las condiciones físicas y/o mentales, etc.) (Cruz, 2011).

	Tasa de envejecimiento (%)	Índice de vejez	Índice de masculinidad			
			Total	De 0 a 14	De 15 a 64	De 65 y más
2008	26,05	2,1	1,05	1,04	1,15	0,85
2013	26,21	2,35	1,07	1,11	1,16	0,87

Tabla 4. Envejecimiento, vejez y masculinidad en el área SACAM (2008-2013)

Elaboración propia a partir los Padrones Municipales de 2008 y de 2013 (IES-JCCM, 2014).

El cálculo del índice de vejez nos permite matizar estos resultados y, sobre todo, ponerlos en relación con el otro grupo de población que

más claramente refleja la reducción de la fecundidad, la población joven. El resultado que obtenemos con este índice nos expresa el número de personas mayores que hay por cada joven. Así, mientras que en el año 2008 la comarca de SACAM registraba un total de 2,10 persona mayor por cada joven, en 2013 esa cifra crece hasta llegar a 2,35 persona mayor por cada joven. Luego, sin duda, del año 2008 al 2013 es el grupo de jóvenes el que más claramente se ha visto reducido, confirmando así el retroceso de la fecundidad señalado.

Por otro lado, el índice de vejez también puede ser utilizado como indicador aproximado de masculinidad, puesto que conocida la mayor esperanza de vida de las mujeres (González, 2009), unos resultados elevados del indicador de vejez suelen coincidir con un índice de masculinidad bajo. De hecho, así ocurre en la comarca de SACAM en donde el índice de masculinidad en la población mayor es siempre inferior a uno (Tabla 4). Si relacionamos el número de hombres con el de mujeres, y el resultado no supera la unidad, tenemos menos hombres por mujer y viceversa. De hecho, esta lectura inversa dirigida en concreto hacia los grupos de 0 a 14 y de 15 a 64 años, confirma de nuevo la falta de mujeres en edad de reproducción en la comarca de SACAM y, en consecuencia, la reducción de la fecundidad por cuestiones socioeconómicas.

	Hábitat concentrado			Hábitat disperso		
	Hombres	Mujeres	Índice de masculinidad	Hombres	Mujeres	Índice de masculinidad
2008	12.333	11.8970	1,04	1.843	1.608	1,15
2013	11.797	11.221	1,05	1.797	1.477	1,22
2008-2013	-4,35%	-5,68%	-	-2,50%	-8,15%	-

Tabla 5. Indicadores de masculinidad del área SACAM y según tipo de hábitat (2008-2013)
 Elaboración propia a partir del Nomenclátor de 2008 y de 2013 (IES-JCCM, 2014).

Un análisis espacial de la distribución de la población femenina en la comarca de SACAM nos muestra que, además, la “pérdida” de mujeres se produce sobre todo en aquellas residentes de forma dispersa. Así lo muestra la evolución porcentual de los datos disponibles entre 2008 y 2013, con valores mucho más elevados que los recogidos por el descenso de la población masculina en hábitat disperso. Una diferencia que, por el contrario, no se hace tan evidente entre los hombres y las mujeres que viven en las cabeceras municipales (Tabla 5). Luego, la combinación del índice de masculinidad y la evolución de la población dispersa según género, nos alerta de la sobremasculinidad que caracteriza el hábitat disperso de la

comarca de SACAM. Este panorama potencia sin duda los factores de vulnerabilidad y/o exclusión social de una población ya de por sí físicamente en desventaja (por cuestiones de accesibilidad a los equipamientos y servicios básicos), con patologías específicas derivadas del aislamiento relacional y frecuentes entre la población masculina de edad avanzada, como el alcoholismo, la malnutrición, etc.

Todos estos factores demográficos, sociales y espaciales son, pues, elementos que contribuyen a la existencia de diversos (y nuevos) perfiles de población en situaciones de exclusión social. De hecho, entre los más destacados por los entrevistados encontramos a: i) familias formadas por matrimonios adultos con descendientes a su cargo, en las que el sustentador principal está desempleado y ha agotado las prestaciones y subsidios disponibles ("familias normalizadas"), ii) inmigrantes, iii) personas mayores, iv) enfermos mentales y/o discapacitados, v) mujeres y vi) población infantil y/o juvenil. No obstante, en la medida que existen diversas percepciones sobre las nociones de pobreza y de exclusión social, y ambos son además fenómenos dinámicos (Estivill, 2003), también es cierto que no todos los entrevistados encuentran siempre a estos perfiles dentro del conjunto de población excluida. El análisis de los principales riesgos que afectan a cada uno de los perfiles diferenciados nos ayuda a entender dicha percepción, así como fijar las características básicas de cada uno de ellos (sobre todo tras la crisis socioeconómica iniciada en 2008).

4. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL: VULNERABILIDAD, POBREZA, EXCLUSIÓN Y RESILENCIA

Analizar el impacto de la crisis en las (nuevas) formas de exclusión social en el medio rural supone, en primer lugar, resolver un problema conceptual vinculado a la multiplicidad de términos afines con los que se relaciona la exclusión (pobreza, vulnerabilidad, precariedad, marginación, fragilidad, privación, etc.). Y, en segundo lugar, estrechamente vinculado con esta construcción epistemológica, debemos tener presente que la exclusión no es un estado en el que los individuos permanezcan constantemente, sino que es reversible, dinámico. La exclusión resulta así de la coexistencia de varias situaciones límite, que solo tienen sentido si se las observa desde una perspectiva de vulnerabilidad, a la que se llega por distintos motivos (Estivill, 2003; Laparra, 2010; EAPN, 2011; Boilleanu y Bonerandi-Richard, 2014).

El término de vulnerabilidad hace referencia al proceso por el que cualquier individuo, grupo o territorio, desde una posición desfavorecida (o no), hace frente a situaciones inesperadas mediante el uso de diferentes mecanismos y/o recursos (propios y ajenos) (Egea, 2012; Boilinau y Bonerandi-Richard, 2014). Las causas, consecuencias y efectos de dicha desventaja resultan de dos elementos: por un lado, los riesgos e imprevistos a los que cabe enfrentarse, y que pueden ser de tipo político, económico, naturales, vinculados a cambios en el mercado laboral (pérdida de empleo), a la disminución de ingresos y de consumo, con problemas de vivienda y de acceso a la misma, pérdida de cobertura social y asistencial, pertenencia a grupos minoritarios, cambios en la estructura familiar, etc. Por otro lado, el segundo elemento vinculado a la vulnerabilidad son los activos o recursos con los que se cuenta para mitigar el impacto de los riesgos. Las características y el uso de los recursos serán precisamente los que marcarán diferentes niveles de vulnerabilidad frente a los riesgos e imprevistos. Estos recursos (tangibles e intangibles) pueden presentarse en tres ámbitos: i) en las mismas personas, bien de forma física (edad, sexo, etc.) o psicológica (personalidad, autoestima, etc.); ii) en la legislación y en la tradición o cultura, lo que permite adquirir derechos y acceder a determinados bienes y servicios; y iii) en las redes sociales establecidas con la comunidad a la que se pertenece y/o con sus instituciones (de trabajo, etc.) (Tezanos et al., 2013). En este sentido, el fortalecimiento del tejido social y comunitario es clave para intentar dar solución a situaciones de riesgo (Molina et al., 2008). Por todo ello, podemos comprender que no todas las personas, grupos y/o territorios están expuestos de igual forma a los (mismos) riesgos, ni todos emplean el mismo tiempo para superar sus consecuencias, ni todos tienen la misma capacidad de respuesta.

Una de las situaciones de vulnerabilidad más importantes es la pobreza. Esta tradicionalmente ha sido entendida como la falta de recursos materiales, pudiendo ser estudiada desde varias perspectivas complementarias, lo que permite mejorar la comprensión del fenómeno: pobreza objetiva y subjetiva, absoluta y relativa, pobreza transversal y persistente, y privación multidimensional o pobreza carencial.

La pobreza objetiva se obtiene a partir del uso de diversos indicadores cuantitativos, como el nivel de ingresos, de gasto, etc., normalmente a partir de datos proporcionados por los hogares, mientras que la pobreza subjetiva se apoya en la percepción de las personas sobre su propia situación económica. Estrechamente vinculada a esta aproximación tenemos la distinción entre pobreza absoluta o relativa. La primera supone

situaciones en las que las personas no tienen cubiertas las necesidades básicas, algo complicado de medir debido a las diferencias que hay sobre cuáles son estas necesidades, pero sobre todo por los distintos niveles de desarrollo económico existentes entre regiones. Es por ello que entre los países de la OCDE se usa el término de pobreza relativa. Este remite a la existencia de un umbral de ingresos, lo que depende del grado de desarrollo (o desigualdad) de la sociedad que consideramos.

En la Unión Europea (UE) este “punto de corte” se establece, en general, a partir de la renta per cápita de cada Estado, quedando establecido en el 60% de la mediana nacional. Así, por ejemplo, el umbral de pobreza para el caso español quedaba fijado en 7.040€/año para los hogares de una persona (o lo que es lo mismo, 586€/mes) para el año 2013⁶. Cuando el valor de esta distribución de los ingresos está poder debajo del 30% de la mediana, hablamos entonces de pobreza severa. Este hecho nos permite apuntar que si en el caso de la pobreza absoluta tenemos personas con dificultades para acceder a los hábitos y patrones de vida medios de la sociedad a la que pertenecen, es lógico considerar que aquellos individuos o familias afectadas por una pobreza severa tendrán carencias graves en aspectos como la nutrición, la salud, la formación, la vivienda, etc.; es decir, todos aquellos bienes y servicios considerados necesarios por la sociedad para alcanzar un mínimo de bienestar. En consecuencia, pobreza severa y pobreza carencial (o privación multidimensional) pueden ser dos expresiones empleadas como sinónimos.

Sin embargo, al hablar de pobreza no solo interesa conocer su extensión y distribución espacial y social (dónde están y cuáles son sus características), sino también su grado de persistencia. De este modo, al atender a la duración del fenómeno hacemos referencia al carácter dinámico de la pobreza y al grado de movilidad de las personas entre los diferentes niveles de ingresos. Esta división entre pobreza transversal y persistente resulta interesante para identificar situaciones en las que la desigualdad y la exclusión social aumentan su gravedad, al suponer estas una agudización extrema de la falta de oportunidades. En este sentido, en la UE se considera que una persona está en situación de pobreza persistente si, clasificada como pobre en el último año, ha estado en igual situación en al menos dos años más de los tres últimos años (EAPN, 2011; Pitarch, 2014).

Todas estas aproximaciones al término de pobreza muestran una concepción dinámica, pluridimensional y estructural del fenómeno, en

⁶ Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para 2013. Fuente: <http://www.ine.es/prensa/np811.pdf>. Consulta realizada el 23 de julio de 2018.

consonancia con la evolución de las representaciones que se han ido produciendo sobre dicho concepto desde los años noventa (Alcock, 1993. En Estivill, 2003; Tezanos et al., 2013; Boilineau y Bonerandi-Richard, 2014). El motivo no es otro que la constatación de que la pobreza ya no depende solo de la situación en el mercado laboral. Es decir, el empleo ya no protege contra la pobreza porque lo que cada vez importa más es la calidad de este, en tanto en cuanto se puede tener un trabajo, pero seguir siendo pobre. Aparte de que la situación opuesta, estar desempleado, no conlleva necesariamente el ingreso en la categoría de pobre (EAPN, 2011; Tezanos et al., 2013; Laparra, 2014; Pitarch, 2014).

Sin embargo, a pesar del fuerte desarrollo que ha experimentado el concepto de pobreza y de su incorporación cada vez más frecuente en los discursos populares sobre los resultados de la actual crisis económica, es importante tener presente que la idea de pobreza no puede abordar por sí misma la desigualdad de la sociedad. Es necesario un contexto más amplio que la simple consideración de los ingresos, en donde se tengan en cuenta también otras pautas o procesos de segregación dinámicos, como por ejemplo la vivienda, la formación, la asistencia médica, la participación y representación política, etc.; es decir, un marco de trabajo capaz de incluir la noción de derechos sociales.

De este modo, hablamos de exclusión social “como una acumulación de procesos confluyentes con rupturas sucesivas que, arrancando del corazón de la economía, la política y la sociedad, van alejando e ‘inferiorizando’ a personas, grupos y territorios de los centros de poder, los recursos y los valores dominantes” (Estivill, 2003:19-20). La multidimensionalidad que encierra este concepto (y que podemos constatar en esta definición tomada como ejemplo) ofrece una acertada visión sobre la pluralidad de las problemáticas que afectan a los excluidos. No obstante, esta diversidad hace que el término de exclusión social tenga una capacidad limitada (cuando no nula) para diferenciar realidades extremadamente heterogéneas (Karsz, 2004).

Con todo, pese a esta y otras críticas, Castel (1996) señala que el concepto de exclusión social puede resultarnos útil si es utilizado para denominar situaciones sociales especialmente graves que, por otro lado, comienzan en la vulnerabilidad. Este autor distingue tres espacios de la vida social, indicando que lo más importante es aclarar los procesos que hacen transitar a los individuos, grupos y/o territorios de un espacio a otro, y no tanto situarlos en ellos. Es decir, conocer cuándo y por qué se pasa de la integración a la vulnerabilidad, y de esta a la exclusión social (Figura 2).

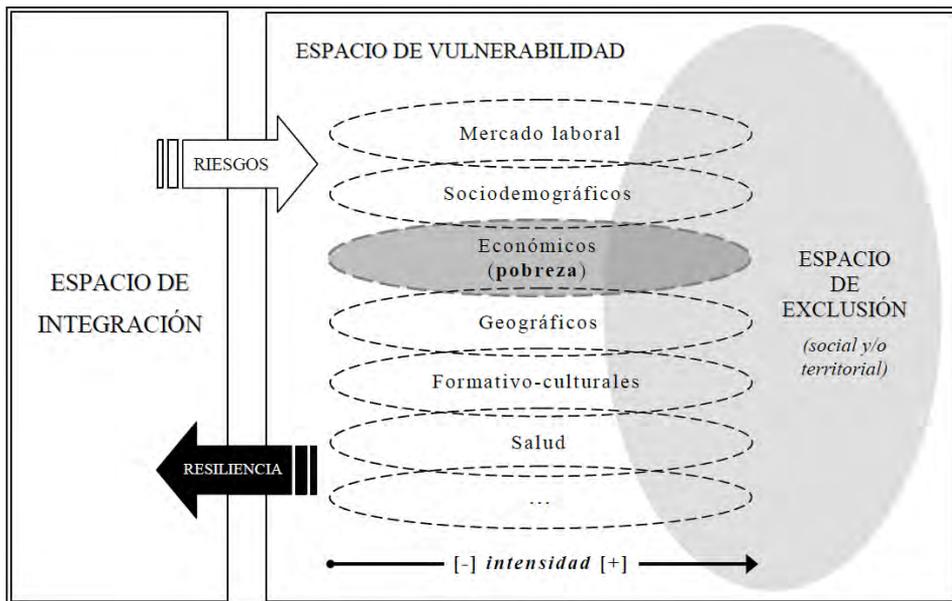


Figura 2. Espacios de la vida social
Fuente: Elaboración propia a partir de Castel, 1996 y Egea, 2012.

La zona de integración recoge las situaciones normalizadas en las que los recursos del sistema se dan (y refuerzan) en positivo: la población dispone de trabajo y protección social, cuenta con relaciones socio-familiares estables y participa (de forma más o menos activa) en la vida política-institucional. Lógicamente, en este espacio puede darse cierta desigualdad controlada según las distintas situaciones y condicionantes de cada individuo, grupo o territorio. Pero la disponibilidad de un trabajo regular y unos soportes sociales e institucionales firmes, evitarán la inestabilidad social (Molina et al., 2008; Tezanos et al., 2013).

Ahora bien, estos individuos, grupos o territorios pueden verse desplazados hacia un espacio de vulnerabilidad en función de los riesgos (inesperados o conscientes) que les afecten (o asuman), así como de los recursos y activos de los que dispongan o puedan conseguir a nivel personal, político-cultural y socio-familiar. Si la situación se agrava como resultado de la interacción y sinergia negativa de los riesgos y los activos, se llega al espacio de exclusión.

Sin duda el mercado laboral (entendido como fuente de ingresos) es uno de los mecanismos clave de la transición entre los tres espacios de la vida social. La pérdida del empleo, o su precarización, supone el empobrecimiento de las relaciones sociales, el deterioro de la autoestima personal y las dificultades de acceso a unos niveles de vida estándar.

Con frecuencia, estas situaciones de riesgo pueden ser compensadas más o menos por el apoyo social, los lazos familiares, de amistad y/o vecindad, y la protección pública. Pero cuando estas redes y/o mecanismos de seguridad se reducen o desaparecen, la población que se encuentra en desventaja o riesgo se ve desplazada hacia posiciones cada vez más desfavorecidas (Molina et al., 2008; Mendiara, 2014).

Junto al mercado laboral, otros mecanismos básicos que permiten explicar para el caso español el desplazamiento (en negativo) entre los espacios de la vida social, son i) la fragmentación de la sociedad y ii) el fracaso de la inclusión propuesto por el Estado de Bienestar (Laparra, 2000; Subirats et al., 2005). El primero de ellos es resultado de cuestiones sociodemográficas como la diversificación étnica derivada de la inmigración, la alteración de la pirámide de población española y la consecuente modificación tanto de las tasas de dependencia como de las formas de convivencia familiar (al incrementarse todas las opciones posibles, pero en particular la monoparentalidad).

El segundo mecanismo se vincula, por su parte, con dos aspectos complementarios: por un lado, con la segregación que se produce en ciertos ámbitos de bienestar en donde el Estado apenas ha jugado (ni juega) papel alguno como, por ejemplo, los mercados vinculados al suelo y a la vivienda. Y, por otro lado, el déficit de integración del Estado de Bienestar es también resultado de debilitamiento que este experimenta como consecuencia de las políticas de austeridad, los recortes en las prestaciones sociales y las liberalizaciones de empresas y/o servicios públicos. De este modo, cada vez surgen más fracturas sociales en el acceso a los derechos básicos de un número creciente de ciudadanos, creándose así una sociedad dual con consecuencias espaciales: territorios ricos y territorios pobres con diferentes grados (estrategias, recursos, activos) de resiliencia ante la crisis (Pitarch, 2014).

Precisamente la resiliencia, entendida como la capacidad de los individuos, grupos o territorios de hacer frente a eventos disruptivos, superarlos y salir fortalecido de ellos (Wilding, 2011), es el mecanismo o proceso que explica el desplazamiento en positivo entre los espacios de la vida social, permitiendo en el mejor de los casos reincorporarse a la zona de integración (figura 2). En el medio rural, ámbito espacial en el que se centra la presente investigación, estas disrupciones pueden resultar de la desaparición de una base industrial o del cierre de un yacimiento de empleo. Pero también pueden derivar de la disminución prolongada de la calidad de vida que experimenta la sociedad rural, como consecuencia tanto de los procesos de despoblación como del cierre y/o concentración espacial de servicios y equipamientos elementales (escuelas, cajas

de ahorro, centros de salud, líneas de transporte público, comercios, etc.). De hecho, este último proceso es puesto en marcha cada vez de forma más habitual por parte de las administraciones públicas, que intentan ofrecer al medio rural una protección mínima ante los efectos de las desregulaciones, privatizaciones y recortes resultantes de la crisis económica (Furuset, 1998; Brereton et al., 2011).

En el caso español, esta crisis afecta al conjunto de la sociedad (y por consiguiente, tanto a la población urbana como rural) de forma especialmente intensa debido a la articulación de cuatro factores, tres de ellos de corte económico y uno psicológico (Tezanos et al., 2013): primero, por el ascenso de los precios de los bienes de consumo; segundo, por el importante incremento del desempleo, con especial incidencia en determinados sectores (construcción) y determinados perfiles (paro de larga duración); tercero, por el aumento del endeudamiento de las familias como resultado de la subida de los tipos de interés; y cuarto, por la expansión de un clima de pesimismo que, al agravar la percepción de la crisis, retrae aún más el consumo y la inversión.

El resultado más llamativo de esta situación es la aparición de una tipología de "nuevos excluidos": individuos que por su biografía, trayectoria personal y contexto social (pero también espacial) no se reconocen como parte de los sectores más necesitados de la sociedad y, por tanto, ni están mentalizados para pedir ayudas, ni conocen las alternativas ni los procedimientos asistenciales existentes si los hay, pues con frecuencia no existen mecanismos de atención para estas situaciones (Tezanos et al., 2013).

5. RESULTADOS SOBRE PERFILES DE POBLACIÓN Y RIESGOS DE EXCLUSIÓN

En primer lugar, la práctica totalidad de los entrevistados destacan la existencia de familias en riesgo de exclusión a las que en principio no se considera vulnerables y que se identifican como "familias normalizadas". Es decir, matrimonios jóvenes con descendientes en los que uno o ambos progenitores han perdido el empleo y, además, agotado las prestaciones. Luego, personas que no son usuarios tradicionales de servicios sociales y a los que la crisis abocaba por primera vez a recurrir a estos recursos y servicios públicos en ejercicio de sus derechos ciudadanos, o a solicitar a la ayuda asistencial de otras organizaciones. Además del aspecto económico, este perfil presenta igualmente otro componente que García Roca

(2012:105) denomina “pánico al descenso social”. Este no es más que la sensación de “miedo a traspasar la línea divisoria de las clases sociales” y el “individualismo del sálvese quien pueda”. Como resultado, el verse en estas situaciones de “desclasamiento” provoca el desarrollo de otros comportamientos y conductas que aumentan la vulnerabilidad de su posición, como por ejemplo cuestiones vinculadas a la violencia de género, adicciones, trastornos alimenticios, o crisis de salud:

La gente que agota las prestaciones de empleo y que se han quedado fuera del sistema y no tiene otro tipo de recursos para hacer frente a las necesidades básicas, demandando prestaciones económicas, para pagar el alquiler, la hipoteca, los alimentos, etcétera. Son familias normalizadas donde no hay otros factores socio-familiares que les afectan, pero su situación económica puede derivar en otros problemas más graves. Son excluidos no pobres, que además no se quieren mover del municipio para trabajar o buscar empleo por arraigo familiar [...] Son más vulnerables a partir de los cincuenta años, momento en el que podemos decir que entran a formar parte del paro estructural, derivando todo ello en problemas de violencia familiar, alcoholismo, etcétera (Entrevista A.7).

Dentro de esta categoría de “familias normalizadas” podemos destacar ciertos casos que cristalizan en un proceso (involuntario) de retorno al medio rural, como una forma más de adaptarse y hacer frente a la nueva situación. De este modo, algunas familias residentes fuera de la comarca de SACAM regresan a sus pueblos de origen bien a vivir con familiares cercanos (padres y/o abuelos), o a residir en una casa que tuvieran en propiedad y utilizasen como segunda residencia, o en manos de algún familiar. Esta estrategia no referencia solamente el ahorro en los gastos relacionados con la vivienda y su disfrute, sino la búsqueda de amparo en los ingresos de los familiares y apoyo en el cuidado de menores. En cualquier caso, la presencia de estas personas es vista por los entrevistados como algo temporal, asumiendo que, en la mayoría de los casos, cuando la situación mejore o haya de nuevo oportunidades fuera, regresarán nuevamente a la ciudad. Con todo, esta “vuelta al pueblo” se señala como poco significativa y prácticamente circunscrita a personas que tienen algún tipo de vinculación socio-patrimonial con la comunidad local.

No obstante, dentro del espectro de familias en la que el sustentador principal ha perdido el empleo y las prestaciones, para los entrevistados el perfil que presenta mayores problemas de exclusión era el de los hogares formados por inmigrantes extranjeros. Si recordamos, antes de

la crisis se había configurado un modelo migratorio basado en un componente laboral y una integración social precaria, por lo que los efectos de la crisis sobre el desempleo y las políticas de inclusión habían situado directamente al colectivo inmigrante en posiciones todavía más graves de exclusión social (Laparra, 2014). A todo ello se sumaban otros aspectos de base que incrementaban su posición de vulnerabilidad como, por ejemplo, las nulas opciones de recurrir a prestaciones básicas como la atención sanitaria de urgencia, ayudas para el acceso a vivienda, etc. Sin hablar del aislamiento social o el rechazo ligado a planteamientos racistas o xenófobos que, en medio rural, adquieren todavía en pleno siglo XXI rasgos más radicales que los presentes en espacios urbanos. Esto se debe al habitual empleo de esta población como mano de obra irregular en la agricultura o en los servicios personales y, por consiguiente, una clara falta de reconocimiento y valoración social:

Los primeros en necesidad de atención social, que son rumanos muchas veces que vienen en condiciones de indigencia absoluta, y que acuden al ayuntamiento y que no les puedes dar con la puerta en las narices, que tienes que prestarles una ayuda mínima y que antes pues con el servicio que existía desde la gestión administrativa, el apoyo en su tramitación laboral, incluso la pequeña ayuda económica que les pudiera prestar pues todo ha desaparecido (Entrevista B.5).

Otro de los colectivos en situación de exclusión es el de las personas mayores, tal y como hemos identificado con anterioridad. Su mayor o menor vulnerabilidad esta configurada por unos ingresos económicos bajos, procedentes en su mayoría de pensiones (no contributivas) en claro descenso (Tabla 6). Estas pensiones, en muchas ocasiones, apenas sirven para hacer frente al aumento de los gastos ordinarios resultantes del incremento del coste de determinados bienes y servicios elementales, como medicamentos o el suministro energético del hogar. Además, con frecuencia esas pensiones se convierten en la principal (cuando no única) fuente de ingresos para el núcleo familiar extenso. Como resultado, se trata de un perfil que ve incrementada todavía más su precariedad al verse "obligados" a compartir unos recursos escasos:

Las pensiones no se han revalorizado, pero es que pagan mucho más: las medicinas y sobre todo la luz [...]. La gente mayor se está viendo muy apurada de dinero. Estamos hablando de pensiones bajas, que siempre han sido bajas por otro lado, ya que han cotizado lo mínimo en la agricultura. Pero claro, tienen que hacer frente a situaciones que

antes no eran así, como el pago de los medicamentos, que les está suponiendo un coste importante, el tema de los suministros, con la subida de la luz, por ejemplo, lo que supone un verdadero trauma para aquellos por ejemplo que llevan máquina de oxígeno, que pueden tener recibos de doscientos euros. Claro, con seiscientos y pico euros se tienen que costear todo esto (Entrevista A.5).

Por otro lado, la vulnerabilidad de la población de más edad viene determinada también por las características de salud física y mental asociadas a la etapa de la vida correspondiente. Según el IMSERSO (2008:186), “las personas mayores no solo presentan peor estado general que el resto de la población, sino que también soportan enfermedades en mayor grado”. Luego, se trata de un perfil de población especialmente vulnerable a los recortes en atención sanitaria y sociosanitaria, con frecuencia habituales en el medio rural (como es el cierre de las urgencias médicas). Pero además de estos problemas, la población de más edad experimenta también la pérdida irremediable por defunción de sus vínculos personales y sentimentales, o el alejamiento de sus familiares más cercanos, exponiéndose así a los riesgos asociados a la soledad y el aislamiento social. Este rasgo se recrudece en espacios rurales como el de la comarca de SACAM, ante los habituales problemas de incomunicación y confinamiento geográfico resultante de una compleja orografía y una adversa climatología (especialmente invernal).

	2008	2013	2008-2013 (%)
Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (total)	4.608	4.318	-6,3
Invalidez	1.981	2.213	11,7
Jubilación	2.627	2.105	-19,9
Pensiones asistenciales (total)	469	79	-83,2
Enfermedad	412	71	-82,7
Vejez	57	7	-87,1
Prestaciones de la LISMI (1) (total)	853	523	-38,7
Subsidio de garantía de ingreso mínimo	459	174	-62,2
Subsidio de ayuda de tercera persona	58	23	-59,8
Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte	43	4	-90,3
Asistencia Sanitaria y prestación farmacéutica	355	344	-3,1

Tabla 6. Beneficiarios pensiones no contributivas, provincia de Albacete (media anual, menos prestaciones LISMI)
 Elaboración propia a partir de los datos de Protección Social del IES-JCCM (2014).
 Nota: (1) Ley de Integración Social del Minusválido.

Otro perfil cuya vulnerabilidad viene determinada por el estado de salud es el de los enfermos crónicos, los enfermos mentales y las personas en situación de discapacidad. En general, se trataba de colectivos en los que confluyen y se retroalimentan factores de naturaleza diversa más allá del estado de salud, como es el (des)empleo, la falta de igualdad de oportunidades o las dificultades de movilidad. Además, se trata de una población especialmente afectada por los recortes en servicios de atención sanitaria. De hecho, los entrevistados nos destacan la posición de elevada vulnerabilidad de las personas afectadas por enfermedades mentales, sobre todo al experimentar problemas de acceso adecuado a los servicios de diagnóstico y atención pertinentes. Este es un problema importante si tenemos en cuenta que la presencia de este perfil es más elevada en las áreas rurales españolas que en otras zonas, debido a múltiples causas, como por ejemplo los emparejamientos entre miembros lejanos de una misma familia (Charroalde y Fernández, 2006). Sin olvidar que, como las personas mayores, es también un colectivo en donde cada vez son menos los que pueden disfrutar de prestaciones económicas (no contributivas) (Tabla 6).

No obstante, para algunos de los entrevistados la situación de las personas en situación de discapacidad no es excesivamente problemática en la comarca de SACAM, debido a que, por un lado, a nivel municipal suele existir siempre algún tipo de recurso, por limitado que sea, debido a la sensibilidad especial que despierta este colectivo. Y, por otro lado, se trata de una población que todavía dispone de una partida de ayudas económicas bien para su uso diario, bien para la adquisición puntual de equipamiento sanitario específico. Esta posición evidencia la advertencia que realizábamos anteriormente, cuando señalábamos la diferente interpretación a la que se ajustan los conceptos de pobreza y exclusión.

Por otro lado, en el contexto español se señala con alarma el aumento de las situaciones exclusión social y de pobreza que afectan a los menores. Así, el último Informe FOESSA señala que estos presentan una tasa de exclusión del 35%, siendo más de la mitad de esos casos (18,2% del total) situaciones de exclusión severa (Laparra, 2014). En Castilla-La Mancha en 2010 el 27% de los menores de edad se situaban en riesgo de pobreza (González-Buenos et al., 2012). Sin embargo, en la comarca de SACAM la infancia como colectivo no se señala de forma específica como en riesgo de exclusión. Ahora bien, el discurso de ciertos entrevistados sí que presta atención a situaciones de vulnerabilidad que singularmente les afectan, como puede ser la disponibilidad de recursos adecuados para su formación, vía materiales educativos (libros y equipamiento escolar),

ayudas al transporte escolar y/o comedor, para realizar actividades extraescolares, etc.:

En cuanto al colegio había familias que no podían comprar los libros [...] incluso se dan casos en los que hay niños que dejan de ir al cole porque no pueden respetar el menú semanal, y no pueden llevar un zumo, fruta o un bocadillo. Es a través lo de los centros educativos que detectamos muchos problemas de alimentación, ropa o higiene (Entrevista A.1).

Estas observaciones entroncan con la identificación de la exclusión social en la infancia en términos de privaciones que, tal y como señala el informe FOESSA (2014:168), pueden derivar a medio o largo plazo “en problemas de salud, deterioro del rendimiento educativo y dificultades para la integración social”. Ahora bien, los entrevistados también relacionan la vulnerabilidad de la población infantil y juvenil de la comarca de SACAM con otro tipo de cuestiones, como el tipo de educación, la atención recibida en el seno de las familias y la debilidad y escasa dimensión de las redes sociales.

Respecto al género como articulador de las desigualdades, las mujeres son descritas como colectivo vulnerable solo por los entrevistados de perfil técnico que trabajan en los servicios específicos de la mujer. Este hecho resulta ya en sí mismo un buen indicador de la situación de invisibilidad y desvalorización general que las mujeres padecen en la comarca de SACAM, tal y como apuntábamos en el análisis sociodemográfico realizado en el apartado anterior. En consecuencia, nadie puede negar que los problemas de las mujeres siguen permaneciendo “ocultos” en la ruralidad y, por consiguiente, se les continúa dando menos importancia. Sin duda, los mecanismos patriarcales de presión y control social de la comunidad sobre su conducta, así como las dificultades de acceso al mercado laboral, y a recursos y servicios que permitieran su empoderamiento, están en la base de su situación de exclusión tanto social como económica:

El maltrato económico se nota cuando las usuarias van a los servicios sociales, de otro modo no se ve. El: -‘dame cinco euros para comprar detergente’. -‘Pues no te lo doy porque no te lo ganas’, es algo habitual. Este caso concreto se da ahora siempre. Este hecho depende de la edad de las personas y de su formación. La mujer siempre ha dependido económicamente del hombre, y cuando ha llegado la crisis la situación es peor y la relación se deteriora más aún por este hecho. Ya no hay dinero y surgen los problemas (Entrevista A.9).

Por último, algunos de los entrevistados han destacado también la presencia de otros perfiles sociales vulnerables o directamente excluidos, si bien de forma mucho más testimonial al tratarse de casos muy poco extendidos. Así, se referencian situaciones de pobreza crónica (infravivienda, desempleo, sin acceso a prestaciones, etc.), protagonizadas por familias y/o individuos de etnia gitana residentes en los principales núcleos de población comarcal (formando barriadas bien definidas). Hay que tener en cuenta que la diferencia entre la situación social de la población gitana y la del resto de la población es muy grande (FOESSA, 2014); en 2007 el 75,5% de la población gitana se encontraba en situación de exclusión, frente al 15% de la población no gitana. En el año 2013 las diferencias seguían siendo considerables, si bien se había reducido levemente el porcentaje de población gitana excluida (72,3%) e incrementado el de la población no gitana (23,5%).

Junto a este perfil, ciertos entrevistados señalaron de forma puntual la presencia de situaciones de exclusión entre personas "expulsadas de las ciudades" y llegadas a la comarca de SACAM de manera aleatoria, con un perfil conflictivo asociado a problemas de adicciones y/o delincuencia. Los motivos por los que se interpreta que esta población se instala en la comarca son considerados equivocados, puesto que estos colectivos ven en el espacio rural una vía "idílica" para salir de su situación. Sin embargo, como se nos indica, en realidad dicha "salida" nunca se consigue puesto que al ser una población con problemas estructurales (y por tanto, constantes con independencia del entorno), el cambio de espacio que realizan les permitiría, en el mejor de los casos, posponer temporalmente sus problemas. Además, a menudo su llegada termina por favorecer una cierta inestabilidad en la sociedad local, a raíz de presentar unos estilos de vida disonantes con los habituales en el área. En consecuencia, el rechazo caracteriza su cotidianidad:

Por experiencia te puedo decir que todos los que han venido aquí se han tenido que volver por donde han venido, creando problemas. Porque son gente con problemas, con una serie de hándicaps, familias desestructuradas que no tiene tampoco solución aquí por otros motivos, como por ejemplo por la mentalidad de la gente, que aquí es muy cerrada, no es muy abierta a lo nuevo. Y luego por otro, es que no hay recursos, y tienen una serie de problemas para los cuales no existen los recursos que puedes encontrar en la ciudad. Por tanto, es una contradicción. La gente que viene, viene con problemas, crea problemas y se van igual que han venido, habiéndonos creado problemas a nosotros también (Entrevista B.2).

6. RESULTADOS SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y EL USO DE ESTRATEGIAS CONTRA LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN Y POBREZA

El empleo simultáneo de recursos públicos, privados y de carácter sociofamiliar como instrumentos de “política social” es algo generalizado en Europa, especialmente, tras la crisis de 2008. La población de la comarca de SACAM no es ajena a esta combinación, más bien al contrario, constituye un buen ejemplo de su empleo. De hecho, sus estrategias de lucha contra la exclusión y la pobreza se caracterizan por utilizar todo tipo de opciones existentes, ya estén estas expresamente diseñadas, o no, para ello. En este sentido, la sociedad rural de SACAM hace uso de las ayudas derivadas de las políticas públicas (con independencia de su procedencia), de los recursos sociocomunitarios que derivan de las acciones ejecutadas por el tejido asociativo de la zona y las entidades de acción social presentes en la misma, y/o de las estrategias familiares e individuales resultantes de las relaciones personales. El análisis de cada una de estas opciones ocupa el presente apartado.

6.1. Políticas públicas y recursos públicos

Las políticas públicas dirigidas a enfrentar los procesos de exclusión en un área como la de SACAM están supeditadas a las estrategias diseñadas e implementadas por el Gobierno Central y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que son las competentes en la materia. El Estado Español, por su parte, se centra en la adaptación de sus políticas al marco establecido por la Unión Europea y su Estrategia 2020, al igual que los sucesivos Planes Nacionales de Reformas, plasmados a su vez en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 o en planes específicos como el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Todos estos documentos planteaban, y plantean, pues todavía no tienen actualizaciones aprobadas, diversas líneas de trabajo para conseguir mejoras en el sistema global de provisión de seguridad social, incluyendo así acciones específicas para lograr la inclusión de la población rural en riesgo de exclusión (Valero et al., 2016).

Sin embargo, la última palabra queda en manos de la Junta de Castilla la Mancha, responsable de diseñar e implementar la mayor parte de los programas y políticas nacionales dirigidas contra los procesos de exclusión social, bajo la etiqueta de “Programas de Integración Social” (PRIS). Estos programas suelen configurarse como proyectos financiados

a menudo en colaboración con las administraciones locales e incluyen, por ejemplo: redes regionales para las personas sin hogar e inmigrantes; prestación de servicios sociales para las personas en riesgo de pobreza y exclusión social; y actividades de fomento de intercambio de experiencias y conocimientos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de las estructuras regionales para hacer frente a la pobreza y la exclusión social entre los profesionales. Por tanto, los programas desarrollados actualmente para hacer frente a la exclusión no son nuevos, sino que vienen implementándose ya desde hace años. En todo caso, lo que sí que puede resultar una "novedad" es la reducción que han experimentado desde el año 2008.

Además de estos programas específicos, la política social autonómica cuenta con otra serie de acciones y recursos orientados de forma particular a lograr otros objetivos sociales (formación, empleo, conciliación, atención a la dependencia, etc.), que terminan por tener una importante incidencia en la prevención y/o alivio de situaciones de exclusión.

Ahora bien, las políticas de austeridad aplicadas como principal intento para solventar la crisis económica iniciada en 2008 habrían agravado el deterioro experimentado por los programas, recursos y servicios de las administraciones públicas destinados a la lucha contra los procesos de exclusión, principalmente mediante la disminución de su financiación, la restricción de sus coberturas y la ralentización en la concepción de las ayudas (Escribano et al., 2015). Probablemente el recorte más grave que ha experimentado el sistema de protección se vincula con la reducción de personal en los equipos de servicios sociales, cuestión que afecta negativamente a la calidad de los mismos (Escribano, 2012), en particular cuando los profesionales "perdidos" eran los que se ocupaban de los colectivos específicos que, por sus características, presentan mayores riesgos de exclusión social. Aun así, los técnicos entrevistados inciden en mostrar cómo por voluntad propia intentan suplir esos recortes a través de otros recursos comunitarios, o simplemente mejorando la coordinación entre ellos y con otros servicios.

De igual modo, al identificarse el desempleo como uno de los factores más graves de los procesos de exclusión social y de pobreza, los programas o planes de empleo son con frecuencia uno de los recursos más demandados por los profesionales y la población en riesgo de exclusión. No obstante, son varios los entrevistados que señalan también que, en ciertas ocasiones, estos programas o planes no hacen otra cosa que cronificar situaciones de vulnerabilidad en ciertos colectivos, debido a la falta de alternativas laborales que experimentan los mismos (caso de las

mujeres con nula o baja cualificación), y las limitadas repercusiones sobre la empleabilidad de sus beneficiarios. El motivo es sencillo: la oferta de una formación repetitiva y escasamente demandada en los mercados laborales locales, debido a su carácter relativamente generalista y uso finalista por parte de las entidades que diseñan y plantean tales programas o planes de empleo. Pero, además, los entrevistados señalan que la implantación de estos programas en el territorio no es ni homogénea ni equitativa. Esto es resultado de la existencia de ciertos factores de corte ideológico o partidista que determinan la concesión de las ayudas para su realización. Como consecuencia, no todas las entidades públicas que los diseñan y promueven llegan a verlos cristalizar ni, aun consiguiéndolo, logran disponer de idénticos recursos para ello (ya sea en términos de profesorado, materiales, número de horas o presupuesto).

Además de todas estas acciones dirigidas al empleo y desarrollados por algunas administraciones municipales o supramunicipales del área, las entrevistas también han proporcionado información sobre la existencia de otro tipo de programas y recursos sociales de iniciativa y financiación estrictamente local. Esta información permite avanzar en la consecución de nuestro segundo objetivo de investigación: determinar todas las posibles estrategias y recursos de lucha contra los procesos de exclusión social que emplea habitualmente la población de la comarca SACAM.

En ocasiones, con los programas y recursos de ámbito local se intenta suplir los huecos dejados por los recortes de las políticas autonómicas y/o estatales, a la vez que se pretende fomentar el desarrollo socioeconómico del municipio y minimizar algunas de sus debilidades estructurales. Ejemplos de este tipo son las prestaciones y/o servicios dirigidos a grupos específicos, como ludotecas, jardines de infancia o aulas de respiro. Todas estas opciones tienen un claro impacto en la evolución sociodemográfica y económica del conjunto de la población, al permitir la conciliación laboral, la familiar y la lúdica o de tiempo libre, sin tener que abandonar el lugar de residencia, ni desplazarse fuera de él.

Por último, no podemos obviar dentro del ámbito de las políticas y de los recursos públicos a las acciones emanadas de los programas LEADER. Es cierto que, tradicionalmente, la lucha contra la exclusión social no se ha considerado explícitamente en las medidas de intervención LEADER. Esto se debe a que el enfoque original de LEADER era el desarrollo territorial más que el desarrollo humano, con la estrategia LEADER centrada en el desarrollo de las zonas desfavorecidas en lugar de la inclusión de las personas vulnerables. Los Grupos de Acción Local (GAL) se

concentraron a menudo en trabajar con las personas más activas en sus áreas para crear empleos y mejorar la calidad de vida en general, en lugar de tratar de ayudar a los grupos más marginados. La inclusión social a menudo no era un objetivo inherente de las estrategias y / o proyectos LEADER, aunque estos lograron claros efectos de inclusión social (Farrell et al., 2000). Por ello, LEADER resulta de gran valor para conseguir la inclusión social de la población de los territorios rurales, ya que puede ayudar a identificar problemas específicos a nivel local, abordarlos a través de acciones a medida y relacionar a los diversos actores necesarios para ofrecer soluciones más eficaces. Es más, en el marco de la política de desarrollo rural 2014-2020 se ha introducido un nuevo enfoque para el desarrollo local a través del CLLD (Community Led Local Development –Desarrollo local impulsado por la comunidad), que abre nuevas oportunidades directas para abordar la inclusión social (ENRD, 2016).

En el ámbito de la comarca de SACAM los actores entrevistados nos han señalado que las acciones desarrolladas que han recibido apoyo desde LEADER se han centrado, especialmente, en el ámbito comunitario y en el de las iniciativas privadas. En el primer caso, LEADER no solo ha ayudado a la puesta en marcha y/o a la consolidación de asociaciones y cooperativas sociales, sino que también ha contribuido a que las existentes mejorasen la calidad de sus actividades, y a poner a punto o ampliar determinadas intervenciones (especialmente en el ámbito de la formación y, por tanto, de la empleabilidad). Como resultado, colectivos en riesgo de exclusión social como las mujeres, la población joven o los parados de larga duración, entre otros, han podido acceder a bienes y servicios a los que, en caso contrario, jamás habrían tenido acceso. Por su parte, en cuanto a las iniciativas privadas identificadas por los entrevistados, el carácter pionero de las mismas ha sido el rasgo más destacado. En origen, su intento por colmar las carencias de acciones ya existentes, especialmente de las procedentes del ámbito público, les ha conferido una notoriedad singular. En su conjunto, este tipo de iniciativas suelen dirigirse a grupos concretos de población, como pudieran ser los mayores, o a resolver un problema específico (como, por ejemplo, asegurar la alimentación de personas con escasos recursos y/o con falta de autonomía para ello) (García, 2006).

6.2. Recursos y estrategias comunitarias, familiares e individuales

Entre los recursos y estrategias desarrolladas fundamentalmente por el ámbito comunitario y personal, encontramos un amplio conjun-

to de situaciones que van desde las actuaciones cuasi-públicas de las grandes entidades de acción social de implantación nacional (cuyas actividades están financiadas frecuentemente con fondos públicos), a las estrategias de supervivencia que dependen tan solo de la capacidad de innovación y adaptación de los individuos y sus familias. Entre ambos polos hallamos tanto los recursos y las actividades realizadas por diferentes asociaciones sociales que actúan sobre un ámbito concreto, como las estrategias desarrolladas en la red de apoyo social.

Las entidades de acción social más importantes implantadas en la comarca de SACAM son Cruz Roja Española y Cáritas Diocesana. Según los entrevistados, su papel ha cobrado relevancia con la crisis y, en particular, tras la implantación de las políticas de austeridad y la deriva asistencialista de la política social. De hecho, con frecuencia estos subrayan que en la actualidad estas dos ONG tienen mayor flexibilidad y capacidad de (re) acción que la de los servicios sociales públicos operantes en toda el área. El problema que plantearía acudir a este tipo de entidades voluntarias está ligado al paso de un sistema público, a un sistema asistencial ligado a la buena voluntad y criterios discrecionales de los responsables de dichas entidades. Este cambio no termina de convencer al conjunto de nuestros entrevistados, especialmente a aquellos de perfil técnico que trabajan diariamente desde las administraciones públicas con población en situación de pobreza y/o excluida. El motivo es sencillo, aun existiendo casos de comunicación constante y fluida entre unos y otros actores (situación que no suele ser predominante, ya que muchas de estas entidades carecen de una organización mínima debido a la escasez y eventualidad de sus miembros), este sistema de ayuda social no garantiza la cobertura total y/o equitativa de toda la población vulnerable, en la medida que podría dejar desamparadas a personas que no cumplan los cánones de necesidad establecidos por estas entidades (ESN, 2008; de Lima y Valero, 2014).

En cualquier caso, los entrevistados de perfil técnico no dudaron en señalar la necesidad de conseguir una adecuada coordinación entre este tipo de entidades no lucrativas y las administraciones públicas, con el fin de maximizar los exiguos recursos en pro de la inclusión social de la población excluida del área. A modo de ejemplo, un buen marco para este trabajo común lo constituyen los denominados “bancos de alimentos”, que han tenido un importante desarrollo y reconocimiento social desde el inicio de la crisis. En general, su labor se circunscribe no solo a la recolección y redistribución de los productos de alimentación, sino que abarca también la gestión de otro tipo de recursos como son los productos

de higiene, la ropa y las ayudas económicas para el pago excepcional de suministros de distinto tipo (energía, agua, etc.). Su funcionamiento varía principalmente entre los que actúan como los tradicionales roperos, en los que se recogen y reparten directamente alimentos y otros productos, hasta aquellos otros en los que se trabaja con un sistema de vales canjeables en ciertos comercios de la población en donde encuentran desarrollo.

En la comarca de SACAM se han desarrollado varias iniciativas de bancos de alimentos, algunos bajo un evidente patrón de lógica pública, al quedar institucionalizados formalmente por una administración local, y por tanto sufragados con recursos públicos y ofrecer un servicio regulado, mientras que otros constituyen iniciativas de carácter más o menos informal que funcionan bajo la lógica de la beneficencia. No obstante, el caso más común a tenor de lo expuesto por los entrevistados es el de la colaboración y coordinación entre las instituciones públicas (normalmente el Ayuntamiento y los servicios sociales, ya sean municipales o comarcales), y las entidades de acción social o asociaciones de carácter sociocomunitario implantadas en el lugar. En cualquier caso, hay que destacar el importante rasgo de voluntariedad en el funcionamiento de este tipo de recursos, ya que se nutre en muchos casos de las entregas solidarias que realizan los vecinos, así como del trabajo voluntario de quienes lo gestionan.

Sin embargo pese a estas muestras de participación, el diagnóstico que nos ofrecen los entrevistados sobre la implicación del tejido asociativo local en cuestiones de apoyo a la exclusión social es dispar, dándose el caso de municipios que cuentan con un alto nivel de actividad asociativa e implicación en dicha causa, y otros en los que la prevalencia de población envejecida y/o desmotivada hace que se cuenten con menos acciones de este tipo. En cualquier caso, los resultados de las entrevistas apuntan a que el trabajo de las entidades sociales de carácter local ha registrado en el conjunto del área SACAM un claro descenso tras el estallido de la crisis. Los motivos son básicamente dos: por un lado, la pérdida de profesionales dedicados a la animación sociocultural y, por otro, la dificultad cada vez mayor que tienen las asociaciones de hacer frente económicamente a unas actividades que apenas son ya sufragadas por las administraciones, resultado de la desaparición de los fondos destinados a dichos fines:

Desde hace tres años, por el tema de recortes, ya no podemos hacer lo que hacíamos. Se siguen haciendo actividades, pero de forma distinta, buscamos nosotros a la gente que puede dar esa formación de forma

voluntaria, por ejemplo, el farmacéutico, que sabes que ha hecho un módulo en nutrición y que no te va a cobrar, a una chica que es enfermera y que sabes que no está trabajando... (Entrevista A.1).

Entre los recursos y estrategias comunitarias que no llegan a institucionalizarse a través de estructuras públicas, los entrevistados destacan igualmente el importante papel que supone el apoyo social para hacer frente a las situaciones de exclusión. Este apoyo se da tanto entre vecinos como de estos a las propias instituciones públicas, al tratar de mejorar (y ampliar) el desempeño de su labor. No obstante, no hay que forzar la visión idílica de las comunidades rurales sin conflicto, donde toda la población se ayuda mutuamente. De hecho, la escasez de recursos y ayudas económicas, por un lado, y el aumento de la demanda, por otro, ha provocado un incremento de la competencia por el disfrute de estas, configurando así nuevas fuentes de conflicto social en las zonas rurales.

Además, tras el trabajo de campo y las entrevistas con los actores clave, hemos detectado que las redes de apoyo social no terminan de funcionar adecuadamente en áreas donde la población está muy dispersa y presenta un considerable envejecimiento, como por ejemplo ocurre en algunas pequeñas aldeas del espacio montano de la Sierra de Alcaraz. Una situación agravada por la presión social y el miedo a ser rechazado o estigmatizado por el resto de familiares y/o vecinos, de modo que no son pocas las personas que en clara situación de exclusión y/o pobreza evitan solicitar cualquier tipo de ayuda a organismos públicos y/o entidades de acción social (Milbourne, 2014).

Las estrategias de apoyo social siguen constituyendo un ámbito de ayuda básico entre los miembros de una misma unidad familiar (sea esta extensa o lejana), especialmente reforzado tras la aparición del nuevo perfil en riesgo de exclusión social que configuran las “familias normalizadas”. Este apoyo social de ámbito familiar se materializa de diversas maneras: recursos económicos, provisión de alimentos, cuidado de parientes, etc., si bien la (re)agrupación de familias completas destaca entre todas las opciones. Dos son las formas en las que se materializa dicho proceso: por un lado, mediante un retorno (involuntario) al medio rural como una forma más de adaptarse y hacer frente a la nueva situación. Por otro lado, mediante una tipología de reagrupación familiar en la que no son los/las descendientes los que regresan al pueblo a vivir con (o de) los padres, sino que estos son llevados a las ciudades por parte de los primeros para contar así más fácilmente con los ingresos y apoyos familiares señalados ya. Todo ello ocurriría bajo el argumento relativo a

la mejor atención sociosanitaria existente en la ciudad, al contar esta con una oferta de servicios más amplia y accesible (Escribano et al., 2015).

Nuestro estudio atiende también a los recursos y estrategias personales que adoptan los individuos para, como describe Laparra (2010), “surfear” los riesgos de exclusión y “mantenerse a flote”. En este sentido, una de las estrategias más extendidas que hemos detectado durante el trabajo de campo ha sido el recurso al desarrollo de una actividad sumergida, ya sea para disponer de una fuente de ingresos o para completar otras previas derivadas de la economía formal o ayudas públicas que pudieran percibirse, y así minimizar el gasto en determinados servicios. Esto se ha manifestado claramente en los servicios de ayuda a domicilio que demandan muchas de las personas mayores residentes en el área de estudio, y que además han visto reducidas sus prestaciones sociales:

Hoy sabemos que hay toda una economía sumergida que está atendiendo a los usuarios que antes teníamos en el SAD, por la mitad de nuestros precios. Si además tienes en cuenta que nosotros prestamos este servicio con ciertas condiciones horarias, y sin contemplar determinadas actividades, es normal que haya gente que prefiera recurrir a este otro mercado, pues se puede ajustar mejor a lo que se pide, y cuando se necesita. Lo que ocurre así es que el servicio pierde calidad, horas de servicio, y usuarios que podrían estar atendidos (Entrevista A.13).

Junto al trabajo informal y el regreso a la vivienda de los padres (o depender económicamente de ellos), son también frecuentes la puesta en práctica de “medidas adaptativas más sostenibles que implican habitualmente una cierta precarización en las condiciones de vida” (Laparra, 2010:117), como por ejemplo el recurso a la recolección de leña para la obtención de energía y el cultivo de alimentos o cuidado de pequeños animales de granja para autoconsumo. Unas prácticas que, aun siendo más habituales en propiedades privadas, terminan por alcanzar igualmente a los espacios públicos o comunales debido a una cierta indulgencia (o, en ocasiones, también desconocimiento) por parte de las administraciones responsables.

En situaciones en las que por ejemplo no se puede hacer frente al pago del suministro eléctrico, hemos detectado que se opta a su acceso a través de prácticas ilegales, básicamente mediante conexiones a redes públicas o privadas (en este caso, pertenecientes a vecinos del mismo edificio o edificios contiguos). Sin embargo, esta situación lejos de resolver el problema suele contribuir a su agravamiento cuando dicha prác-

tica es detectada y denunciada, debido no solo a las multas económicas consecuentes, sino también como resultado del aumento de los gastos económicos que conlleva reestablecer la conexión de forma legal. Esta situación es especialmente crítica si además, como es el caso de los episodios señalados, durante la reconexión se detecta por parte de la compañía eléctrica problemas en las instalaciones existentes, algo habitual debido a la relativa antigüedad y estado de conservación de las viviendas en las que este tipo de circunstancias se presenta (con frecuencia, las más envejecidas del parque urbano del espacio analizado).

No podemos finalizar esta enumeración de estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión sin hablar de la que para nosotros es, territorialmente hablando para el espacio rural, la más negativa alternativa, pero, a su vez, la más antigua y utilizada: la emigración (Romero et al., 1992; Farrell et al., 2000; Bertolini et al., 2008). En principio se trata de un proceso que afecta claramente a la juventud con cierto nivel de cualificación, que buscan empleo en las ciudades o incluso en otros países debido a las limitaciones de los mercados laborales de la zona, pero que igualmente ha terminado por incidir en los inmigrantes del área, quienes cada vez salen más rápidamente de esta tras un tiempo intentando sin éxito integrarse social y laboralmente en ella (Godenau y León Santana, 2012).

7. REFLEXIÓN FINAL

Los resultados que hemos aportado en los apartados previos, si bien se corresponden con una investigación realizada en primavera de 2014, desde nuestro punto de vista siguen siendo válidos años después para el conjunto la comarca albaceteña de SACAM, territorio tomado como caso de estudio por la diversidad de situaciones demográficas y geográficas con las que cuenta. El motivo de esta permanencia en términos de validez se basa en el carácter estructural que explican los motivos por los que las zonas rurales pueden considerarse espacios en constante crisis, y que terminan por excluirlos tanto en términos de inversiones físicas (en carreteras, ferrocarriles, etc.) como en cuestiones sociales. De este modo, se puede hablar de territorios de exclusión, en donde las carencias y los problemas que conducen a esta (que nunca son únicos, sino múltiples), se encadenan, se entremezclan, se reproducen por vía causal unos y otros, de manera que su interconexión es más fuerte y origina situaciones de mayor gravedad y complejidad que en territorios con más

recursos (como los urbanos). De este modo, los procesos y situaciones de pobreza y/o de exclusión social aumentan, se regeneran, se hacen irreversibles y constituyen por consiguiente un problema a largo plazo⁷.

Pese a todo, consideramos posible que, en los años transcurridos desde la realización del trabajo de campo, haya disminuido la intensidad con la que se viven y perciben los procesos, si bien no consideramos plausible su descenso en términos reales y absolutos. Primero, porque las dificultades de empleo siguen siendo una realidad, tanto para colectivos concreto como para el conjunto de la población rural que vive en estos espacios. Segundo, porque muy pocas de las políticas sociales diseñadas y aplicadas durante los años más severos de la crisis se han sustituido por otras de corte distinto. En parte, porque su puesta en práctica entronca con la retirada constante del Estado de Bienestar iniciado hace décadas, en un marco económico y político generalizado propio de la dinámica interna del sistema capitalista. Y tercero, porque en el medio rural, sea cual sea este, los procesos y las situaciones de pobreza y exclusión social terminan por formar parte de su paisaje cotidiano, debido a la conformidad social y cultural de vivir siempre con unos problemas o vulnerabilidades que nunca terminan de resolverse. Esto hace que, desde hace tiempo, la sociedad rural haya dejado de ser optimista sobre su futuro, más bien al contrario, ya que observa como los cambios que se producen en su espacio ni están protagonizados por ella, ni responden a sus verdaderas necesidades. Básicamente, porque cualquier alternativa de futuro parece asentarse en una percepción urbana de la ruralidad, apoyada en estilos de vida y valores tradicionales, y en donde la calidad de vida se concibe, primero, como oposición a todo cambio que se aleje de un pasado idílico; y segundo, de forma subyacente, como rechazo al actual estilo de vida urbano (Ray y Ward, 2006; Escribano, 2012).

De este modo, en relación al primer objetivo planteado al inicio de nuestro trabajo, consideramos probado que la crisis económica, financiera y social experimentada desde finales de 2008 en España (y por extensión, en la comarca SACAM), junto con parte de las "soluciones" a la misma ejecutadas por las administraciones públicas, primero, han supuesto un claro incremento de la tipología de individuos y/o familias vul-

⁷ Podemos pensar así, por ejemplo, en la importancia de la distancia, factor que, junto a la ausencia de trabajo en proximidad, de vehículo privado y de transporte público (este último elemento, asegurado de un modo u otro en las ciudades), transforma a un demandante de empleo en un desempleado de larga duración, o eliminar toda esperanza de regularización mediante contrato laboral a un inmigrante ilegal. En consecuencia, el análisis de la exclusión social en el espacio rural conlleva necesariamente detectar fenómenos más difusos y complejos (Escribano y Valero, 2018).

nerables. Y segundo, los factores responsables de generar situaciones de pobreza y/o de exclusión social se manifiestan (y consolidan) entre los colectivos más desfavorecidos de forma más diversas.

Las “familias normalizadas” son el mejor ejemplo tanto del aumento de colectivos en situación y/o riesgo de exclusión social como de la variedad de mecanismos por los cuales se llega a dichos resultados. Estas eran, y aún son, si bien de forma menos sorprendente, un perfil social que hasta la llegada de la crisis no había estado nunca antes en una posición de vulnerabilidad. El aumento del desempleo y su precarización representan los vectores clave mediante los que la crisis y sus efectos, transformó, y sigue transformando, la situación de estas familias. Pero el factor empleo no es la única explicación. A este se suma el impacto derivado de la acción pública en su intento racional y sostenible de responder a la crisis. Las consecuencias de esta respuesta son múltiples: por un lado, la reducción (a través de su concentración espacial y/o temporal) y desaparición de un amplio conjunto de servicios y prestaciones elementales (caso de las urgencias médicas) y especializadas (Centros de la Mujer, atención a discapacitados, etc.). Por otro lado, la suspensión o restricción de la cobertura (temporal y/o económica) de muchas de las iniciativas dirigidas a la inclusión sociolaboral, como por ejemplo los Programas Sociales de Empleo y los Programas de Integración Social.

Este conjunto de acciones racionales y sostenibles son las que multiplican la precariedad y vulnerabilidad de la población en situación (o riesgo) de exclusión. Por ejemplo, las personas mayores, colectivo que por su estado de inactivos laborales dejan de estar afectados por los impactos sobre el mercado laboral (al menos de forma directa, porque recordemos su papel de salvavidas para muchas “familias normalizadas”). Sin embargo, se trata de una población que se ve afectada igualmente por la reducción de los servicios básicos y la congelación de ayudas económicas específicas (copago farmacéutico, pensiones, etc.). Como resultado, este colectivo ve disminuir considerablemente su calidad de vida (Escribano, 2012).

Pero aún hay un último elemento que dispara la vulnerabilidad en la comarca de SACAM: el constante descenso de poder adquisitivo que experimentan las familias. No solo por la caída de ingresos resultado de la pérdida de empleo, la disminución salarial, o la finalización y/o desaparición de las prestaciones económicas (especialmente no contributivas), sino también por el aumento de los gastos a los que los colectivos en riesgo de exclusión deben enfrentarse. En particular, a los derivados de diversas tasas que gravan el uso de prestaciones hasta ahora gratui-

tas (por ejemplo, la Tarjeta de Accesibilidad para personas en situación de discapacidad o movilidad reducida), o incrementan el de servicios y bienes empleados en el hogar, dado su carácter elemental: electricidad, agua, gas, etc.

En consecuencia, vemos que las soluciones ofrecidas por las administraciones públicas quedan lejos de conseguir la inclusión efectiva de la población vulnerable, sino más bien al contrario. La sustitución de las políticas "pasivas" de inserción por otras "activas", así como el desarrollo de medidas de lucha contra la exclusión social concebidas como complementarias a los sistemas de protección social, no hacen más que consolidar una forma de institucionalización de la exclusión. Es decir, las decisiones y mecanismos razonables y sostenibles del uso de los recursos públicos han creado un perfil específico, el de los excluidos, del que resulta difícil salir.

Para hacer frente a las nuevas y viejas formas de exclusión, y además resolver las necesidades de los diversos colectivos afectados por estas, son varias las estrategias de resolución y lucha habitualmente empleadas en la comarca de SACAM. Precisamente, la detección y modo de empleo de estas ha guiado nuestro segundo y último objetivo de trabajo. Así, hemos comprobado cómo las entidades comunitarias de carácter caritativo o asistencial (iglesia, asociaciones, etc.), y las redes sociales adquieren una importancia creciente en la transferencia de los recursos, en la reconstrucción de vínculos comunitarios, y en el desarrollo de acciones con las que resistir y/o superar las situaciones de pobreza y/o exclusión social. Concretamente, las entidades comunitarias constituyen sistemas alternativos que viven en los "intersticios" de las políticas sociales del Estado y ocupan el puesto que estas han abandonado. Pero como en su mayoría se trata de organizaciones que perciben subvenciones públicas, casi siempre precarias, y funcionan según el principio de voluntariado, sus intervenciones terminan por evidenciar una reducida capacidad de acción, así como por adolecer de una limitada calidad (Rodríguez, 2003).

Las redes sociales constituyen, por su parte, otra de las alternativas básicas de protección informal frente a la pobreza y/o exclusión social. Así, cuando las estrategias individuales fallan o resultan insuficientes, el recurso a la familia deviene un paso habitual. El problema derivado de esta "solución" es la generación de hogares en los que todos, o una gran mayoría de sus miembros, dependen de una o dos personas con ingresos estables, fundamentalmente pensionistas. Este aumento del tamaño (y variedad) del hogar conlleva un claro impacto en sus condiciones de vida, en tanto que para "surfear" la nueva situación se recurre a estrategias de

privación de cuestiones básicas como calefacción, carne y pescado, vestido y calzado, farmacia, ortopedia, etc. Aunque las personas mayores no son los únicos afectados: la población joven, en caso de estudiar fuera del municipio de residencia, suelen empeorar y/o abandonar los estudios por no poder pagarlos (especialmente los relacionados con el ámbito postobligatorio), mientras que los enfermos o las personas en situación de discapacidad abandonan ciertos tratamientos o adoptan otras estrategias de supervivencia con fuertes costes físicos y/o personales (por ejemplo, se deja de acudir a las revisiones programadas, a las actividades de rehabilitación, etc.).

Todo ello, sin olvidar que el territorio introduce condicionantes tanto a una como a otra alternativa, tal y como acontece precisamente en la comarca de SACAM, al presentarse esta como un medio rural con un hábitat disperso y, especialmente en zonas montañosas, escasamente poblado. La crisis demográfica y económica que afecta a este tipo de espacios y sociedades determina que las estructuras familiares, económicas y sociales que mantenían la organización comunitaria propia de estas poblaciones se fragmente y debilite. Por un lado, la carencia de efectivos (sobre todo, de jóvenes) contribuye a que las redes de vecindad basadas en la ayuda mutua y la solidaridad desaparezcan progresivamente. Pero a su vez, por otro lado, la falta de un tejido económico sólido contribuye a que las actividades económicas se hagan cada vez más frágiles y débiles, desapareciendo los motivos y los espacios por los que establecer contactos y relaciones de todo tipo. De este modo, se producen fenómenos de ruptura de los mecanismos sociales y comunitarios de integración, ya que el proceso migratorio socava las pequeñas estructuras existentes de organización local, de solidaridad entre vecinos, de responsabilidad respecto a los recursos, de redes familiares de apoyo a los ancianos, a la población infantil y juvenil, etc. Todo este entorno social que se pierde es importante no solo para cubrir las carencias de determinados colectivos en situación claramente vulnerable (ancianos, enfermos, jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc.), sino que también supone la base sobre la que plantear alternativas de desarrollo futuro, sin las cuales la sociedad rural permanece desarticulada.

Precisamente por todo lo expuesto en el párrafo previo, los programas de desarrollo rural como LEADER pueden llegar a constituir una alternativa más de lucha contra los procesos de pobreza y exclusión social. La simple oferta de servicios de proximidad, o el asesoramiento que ofrecen los equipos técnicos responsables de su gestión, sobre las opciones financieras para la creación de empresas, son dos buenos ejemplos

que evidencian como situaciones de vulnerabilidad pueden dar lugar a oportunidades de desarrollo. Ahora bien, existen dos aspectos que limitan, por el momento, el potencial que encierra LEADER como laboratorio de estrategias resilientes. Por un lado, el hecho de que la lucha contra la exclusión social haya tardado hasta el período 2014-2020 en considerarse como prioritaria en las medidas de intervención LEADER. El motivo es sencillo, tradicionalmente se ha perseguido más el desarrollo territorial que el desarrollo humano, es decir, la inclusión de las personas vulnerables ha quedado supeditada a la de las zonas desfavorecidas.

Y, por otro lado, íntimamente relacionado con el hecho anterior, la ejecución de los programas LEADER no ha favorecido siempre la participación de todos los sectores sociales del territorio, especialmente evidente en el caso de los más desfavorecidos (Alguacil et al., 1999; ENRD, 2016). Así, estos han visto cómo recursos existentes para el desarrollo de sus espacios de vida se les escapan de las manos por no cumplir los requisitos, por falta de financiación propia, por incapacidad para organizarse entre ellos o por falta de formación suficiente. Como resultado, es difícil pasar de un sector agrario (hegemónico y, además, relativamente sencillo de comprender y reproducir), a la transformación de sus productos, o a la apertura y gestión (exitosa) de un bar de aldea o una casa de comidas dirigida al turismo.

De ahí que los responsables de implementar y gestionar las estrategias de desarrollo basadas en la filosofía LEADER, deban conseguir, primero, que los grupos de población en situación de pobreza y/o riesgo de exclusión social queden representados; y segundo, que haya garantías para la realización de proyectos diseñados e implementados por ellos mismos (mediante criterios de discriminación positiva, por ejemplo). Porque si realmente se quiere conseguir la inclusión de esta población, ella debe formar parte (como protagonista activa) de las acciones dirigidas a dicho fin. Ahora, solo resta darle dicha oportunidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALGUACIL, J., CAMACHO, J., FERNÁNDEZ, F., RENES, V. y TRABADA, E. (1999). *Las condiciones de vida de la población pobre desde la perspectiva territorial. Pobreza y territorio*. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Española.
- BERTOLINI, P., MONTANARI, M. y PERAGINE, V. (2008). *Poverty and Social Exclusion in Rural Areas*. Bruselas: Comisión Europea.
- BOCK, B., KOVACS, K. y SHUCKSMITH, M. (2015). "Changing social characteristics, patterns of inequality and exclusion". En COPUS, A. K. y De LIMA, P. (ed.): *Territorial cohesion in rural Europe*. New York: Routledge, 193-211.
- BOILINEAU, E. y BONERANDI-RICHARD, E. (2014). *La pauvreté en Europe: une approche géographique*. Rennes (FR): Presses Universitaires de Rennes.
- BONACHE, J. (1999). "El estudio de casos como estrategia de construcción teórica: características, críticas y defensa". *Cuadernos de economía y dirección de la empresa Universidad de Valencia*, 3 (21), 123-140.
- BRERETON, F., BULLOCK, C., CLINCH, J. y SCOTT, M. (2011). "Rural change and individual well-being: the case of Ireland and rural quality of life". *European Urban and Regional Studies*, 18 (2), 203-227.
- CABERO, V., TREJO, M^a. C. y FERNÁNDEZ, V. (2010). "Pobreza y exclusión social en el ámbito rural". *Debates fundamentales en el marco de la inclusión social en España*, 8, 29-44.
- CASTEL, R. (1996). *Les métamorphoses de la question sociale*. Paris (Francia): Fayard.
- CEBRIÁN, A. (2004). "La acción LEADER II en las Serranías de Murcia y Albacete". *Nímbus*, 13-14, 109-124.
- CHARROALDE, J. y FERNÁNDEZ, D. (2006). *La discapacidad en el medio rural*. Madrid: Colección CERMI.
- CRUZ, J. (2011). "Envejecimiento, caserío y atención social: la familia asume el cuidado del mayor". *Lurralde*, 34, 51-77.
- DE LIMA, P. y VALERO, D. E. (2014). *The Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe. Case study report: Albacete, La Mancha, Spain*. TIPSE: The Territorial Dimension of Poverty and Social Exclusion in Europe.
- EAPN (2011). *La exclusión social en Castilla-La Mancha. Informe Completo*. Madrid: European And Poverty Network Spain.
- EGEA, C. (2012). "Crisis económica, vulnerabilidad social y territorio". En REQUES, P. y COS, O (edit.): *La población en clave territorial. Proce-*

- sos, estructuras y perspectivas de análisis. Actas del XIII Congreso de Población Española. Santander: Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Cantabria, 332-335.
- ENRD (European Network for Rural Development) (2016). *What can LEADER/CLLD and other bottom-up initiatives do?* Working paper for the seminar, Brussel: 17 March 2016.
- ESCRIBANO, J. (2012). "Servicios educativos y sanitarios elementales en el medio rural percepción social e influencia sobre la calidad de vida". *Estudios Geográficos*, 73 (272), 35-61.
- ESCRIBANO, J. y VALERO, D. E. (2018): "La dimensión rural-territorial en los procesos de exclusión social". En MOYANO, E. (coord.): *Informe Socioeconómico de la Agricultura Familiar Española, 2018: Agricultura, desarrollo e innovación en los territorios rurales*. Madrid: Fundación de Estudios Rurales, 92-97.
- ESCRIBANO, J., VALERO, D. E. y SERRANO, J. J. (2015). "Crisis económica, medio rural y mujer: panorámica sobre cuestiones de género y exclusión social en la 'Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel' (Albacete)". En RODRIGUEZ, G. et al. (coord.): *Actas Oficiales del V Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). Desigualdad y democracia: políticas públicas e innovación social*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona e Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), 2.202-2.222.
- ESN (European Social Network) (2008). *Social Services in Transition. Building Capacity, Improving Quality Social Services in New Member States*. ESN working paper for the seminar, Ljubljana: 19-20 May 2008.
- ESTIVILL, J. (2003). *Panorama de la lucha contra la exclusión social. Conceptos y estrategias*. Lisboa: Oficina Internacional del Trabajo.
- FARRELL, G., THIRION, S. y BRUNET, B. (2000). "Lucha contra la exclusión social en el medio rural". *Innovación en el medio rural. Cuaderno de la Innovación. Observatorio europeo LEADER*, 8, 53 pp.
- FOESSA (2014). *VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Española.
- FURUSETH, O. (1998). "Service provision and social deprivation". En ILBERY, B. (ed.): *The geography of rural change*. Londres: Longman, 233-256.
- GARCÍA ROCA, J. (2012). *Reinvención de la exclusión social en tiempos de crisis*. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Española.
- GARCÍA, C. y CASADO, F. (2010). "Inmigración reciente y crecimiento de la población en Albacete (Castilla-La Mancha)". *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 25, 189-210.

- GARCÍA, J. (2006). "Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (Albacete): comidas a domicilio para la tercera edad: ancianos autosuficientes". *Actualidad LEADER. Revista de desarrollo rural*, 31, 38-39.
- GODENAU, D. y LEÓN SANTANA, J. S. (2012). "Estrategias familiares de inmigrantes extranjeros ante la crisis económica". En REQUES, P. y COS, O (edit.): *La población en clave territorial. Procesos, estructuras y perspectivas de análisis*. Actas del XIII Congreso de Población Española. Santander: Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Cantabria, 405-412.
- GOERLICH, F. J., REIG, E. y CANTARINO, I. (2016). "Construcción de una tipología rural/urbana para los municipios españoles". *Investigaciones Regionales*, 35, 151-173.
- GONZÁLEZ, E. (2009). "¿De qué se mueren los ancianos en España?". *Estudios Geográficos*, 70 (267), 567-598.
- GONZÁLEZ-BUENO, G., BELLO, A. y ARIAS, M. (2012). *La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños*. Madrid: UNICEF España.
- IMERSO (2008). *Economía y Personas Mayores*. Colección Estudios. Serie Personas Mayores. Madrid: Instituto de Mayores. Servicios Sociales. Ministerio de Economía, Política Social y Deporte.
- IZCARA, S. (2002). "Jornaleros desocupados e inmigrantes sobreexplotados las nuevas infraclases rurales". En GÓMEZ C. y GONZÁLEZ, J. J. (eds.): *Agricultura y Sociedad en el Cambio de Siglo*. Madrid: McGraw-Hill- UNED, 459-480.
- KARSZ, S. (2004). "La exclusión: concepto falso, problema verdadero". En KARSZ, S. (coord.): *La exclusión: bordeando sus fronteras*. Barcelona: Gedisa, 133-214.
- LAPARRA, M. (2000). *Una perspectiva de conjunto sobre el espacio. El caso de Navarra en el contexto español de precariedad integrada*. Documentos de Trabajo (00/05). Unidad de Políticas Comparadas, CSIC. Universidad Autónoma de Madrid.
- (2010). "El impacto de la crisis en la cohesión social o el surf de los hogares españoles en el modelo de integración de la 'sociedad líquida'". *Documentación social*, 158, 97-130.
- (coord.) (2014). "La fractura social se ensancha: intensificación de los procesos de exclusión en España durante siete años". En FOESSA: *VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España*. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Española, 151-255.
- MARCUELLO, C. (2010). "Nuevas formas de exclusión por el impacto de la crisis". *Debates fundamentales en el marco de la inclusión social en España*, 8, 11-27.

- MATHIEU, N. (1997). "Les enjeux de l'approche géographique de l'exclusion sociale". *Économie rurale*, 242, 21-27.
- MENDIARA, C. (2014). "Las redes de apoyo social de la nueva pobreza atendida en el Centro Municipal de Servicios sociales del barrio de la Magdalena de Zaragoza". *Portularia*, 14 (1), 73-86.
- MILBOURNE, P. (2014). "Poverty, place, and rurality: material and socio-cultural disconnections". *Environment and Planning A*, 46, 566-580.
- MOLINA, J., FERNÁNDEZ, R. y LLOPIS, J. (2008). "El apoyo social en situaciones de crisis: un estudio de caso desde la perspectiva de las redes personales". *Portularia*, 8 (1), 61-76.
- PITARCH, M^a. D. (2014). "Desigualdades regionales, pobreza y vulnerabilidad social en España durante la crisis (2007-2013)". En ALBERTOS, J. M. y SÁNCHEZ, J. L. (coord.): *Geografía de la crisis económica en España*. Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia, 201-230.
- RAY, C. y WARD, N. (2006). "The Futures of Rural Policy: The Significance of Rural Futures Studies". *Discussion Paper*, 7. Newcastle: Centre for Rural Economy, University of Newcastle upon Tyne.